



**NUE 169-A-2019 (AG)**

**Rubio Martínez contra Municipalidad de Ahuachapán**

**Resolución Definitiva**

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:** San Salvador, a las diez horas con treinta y nueve minutos del dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve.

**Descripción del caso**

I. El 22 de julio de 2019, **Enrique René Rubio Martínez** interpuso recurso de apelación ante la resolución emitida por el Oficial de Información de la **Municipalidad de Ahuachapán**, que denegó el acceso a información relativa a: “informes económicos sobre la renta del Estadio José Simeón Magaña y los gastos de mantenimiento de dicho establecimiento deportivo desde el 2015 hasta el 2019”.

*Q.*

*O.C.*

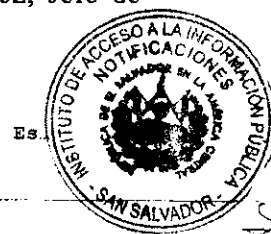
El Oficial de Información de la **Municipalidad de Ahuachapán**, por su parte, resolvió declarar imposibilitado de conceder en virtud de lo manifestado por la Jefatura de Contabilidad Municipal en memorándum con fecha quince de julio de dos mil diecinueve, en la cual manifiesta que no se tiene conocimiento ni información de ingresos de renta del estadio a equipos profesionales; y en cuanto al mantenimiento del inmueble, no es posible generar información en específico de los gastos de mantenimiento de manera detallada, porque todos los gastos de todas las unidades de la Municipalidad están consolidados.

*Le*

El Instituto admitió la apelación y designó al Comisionado **Andrés Grégori Rodríguez** para instruir el procedimiento y elaborar un proyecto de resolución.

Para este caso, el ente obligado no rindió el informe de ley que establece el Art. 88 de la LAIP.

II. El 10 de septiembre del presente año, se realizó la audiencia oral, únicamente con la presencia del apoderado general judicial de la **Municipalidad de Ahuachapán**, **Fredy Armando Rodríguez Tobar**. En la fase de pruebas, aportó como prueba documental: (i) carta extendida en original por el Licenciado Manuel Alfonso López Quiñónez, Jefe de



Cuentas Corrientes y Recuperación de Mora de la Alcaldía Municipal de Ahuachapán, en la cual hace constar que no se han tenido ingresos provenientes de las instalaciones del Estadio Municipal José Simeón Magaña; y (ii) carta extendida en original por la Licenciada Jeamileth Menéndez de Contreras, Contadora de la Alcaldía Municipal de Ahuachapán, en la cual señalan que en relación a los informes económicos por rentar el Estadio Municipal José Simeón Magaña de Ahuachapán a equipos profesionales o no profesionales durante el periodo dos mil quince a dos mil diecinueve; y todos los gastos por mantenimiento de dicho establecimiento deportivo, en relación a esto último, hacen constar que en la Unidad referida no se llevan registros específicos de ninguna unidad. Luego de haber deliberado sobre la pertinencia de la prueba. El Pleno admitió la prueba documental aportada por considerarla pertinente para el presente caso, con base a los artículos 317, 318 y 319 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM); y 196 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA)

En cuanto a los alegatos por parte del ente obligado, expuso en lo medular (en relación al objeto del presente procedimiento), afirmó que según la forma en cómo se manejan las cuentas y gastos de la Municipalidad, el oficial de información se vio imposibilitado de realizar la entrega, pero no fue con la mala intención de esconder la información al ciudadano, sino que fue por la forma en como solicitó la información, eso fue el motivo por el cual no se le proporcionó, porque no cuenta con una información en específico, de lo que genera costos de ese establecimiento que ha señalado.

Asimismo, afirma que no se obtiene ninguna renta con respecto al uso del Estadio, ya que, está abierto para cualquier persona que lo solicite de manera gratuita. Finalmente, señaló que están en la disponibilidad de entregar cualquier información que le sea solicitada, siempre y cuando esté acorde a lo que el archivo de la municipalidad pueda proporcionar. Por lo que solicita que la municipalidad sea sobreseída porque existe prueba contundente que no se genera ese tipo de información de acuerdo a la forma en que el apelante la ha solicitado.

### **Análisis del caso**

Este Instituto advierte que el objeto de controversia del presente caso, recae sobre la información concerniente al mantenimiento y a la renta del estadio Dr. Simeón Magaña de la Ciudad de Ahuachapán.

En este contexto, el examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: (I) consideraciones sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP); (II) referencias sobre información inexistente y las causales por la cuales la información puede considerarse como tal; y (III) Valoración de la prueba y aplicación al presente caso.

I. El acceso a la información pública es un derecho constitucional implícito, es decir, no regulado expresamente en la Constitución (Cn) pero que, a pesar de ello, tiene una condición indiscutible de derecho fundamental surgida del derecho a la libertad de expresión regulado en el artículo 6 de la Cn. El derecho de acceso a la información pública comprende la facultad de buscar, recibir y difundir datos, ideas o informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan *interés público*. Este derecho a saber se enmarca en el ámbito de las libertades individuales, aunque también tiene un carácter colectivo que adquiere relevancia para el fortalecimiento del estado democrático de derecho, porque su ejercicio garantiza la transparencia y permite a las personas acceder libremente a las informaciones en poder de las instituciones del Estado, como un mecanismo de control social a la gestión pública.

Asimismo, el Art. 2 de la LAIP establece que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados de manera oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación alguna. Es decir que, al tenor de la citada disposición, para ejercer el derecho de acceso a la información es necesario que la información exista, haya sido generada, administrada, se encuentre en poder del ente obligado al que ha sido solicitada o que exista un mandato normativo de generarla.

El Art. 6 letra "c" de la LAIP establece que es **información pública** aquella en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico, independientemente de su fuente, fecha de elaboración, y que no sea confidencial. Para la entrega de la información, la LAIP ha diseñado un proceso expedito en el que los oficiales de información cumplen un rol importante al realizar gestiones encaminadas a satisfacer el derecho de toda persona a acceder a la información pública.



Ahora bien, es necesario tomar en cuenta que este derecho no es absoluto y es susceptible de restricciones condicionantes en su pleno ejercicio. No obstante los límites de este derecho no pueden ser arbitrarios, sino plenamente establecidos por el legislador, a efecto de prevenir que la administración pública utilice discrecionalmente argumentos encaminados a negar la información solicitada por cualquier persona.

II. En este sentido y de acuerdo a lo establecido en el Art. 73 de la LAIP, cuando la información solicitada que no se encuentre en los archivos de la unidad administrativa correspondiente, el oficial de información tomará las medidas pertinentes para localizarla en la dependencia correspondiente, y en caso de no encontrarla, expedirá una resolución que confirme su inexistencia.

El propósito de la resolución es que dicho servidor emita una declaratoria en la cual confirme en su caso, la inexistencia de la información solicitada, garantizando que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés y que las mismas fueron las adecuadas para atender a la particularidad del caso en concreto; es decir, dar certeza al solicitante del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada.

En acotación a lo anterior, es atinente señalar que la inexistencia implica necesariamente que la información no se encuentra en los archivos de la autoridad – es decir, se trata de una cuestión de hecho-, no obstante que la dependencia o autoridad cuente con las facultades para poseer dicha información. En este sentido, es de señalar que la inexistencia es un concepto que se atribuye a la información solicitada.<sup>1</sup>

Asimismo, este Instituto ha reconocido como causales que pueden dar lugar a la inexistencia de la información, las siguientes: *a) nunca se haya generado el documento respectivo; b) el documento se encuentre en los archivos del ente obligado pero, se haya destruido por su antigüedad, fuerza mayor o caso fortuito; y, c) la información haya estado en los archivos de la dependencia o entidad y la inexistencia se derive de su destrucción, en este caso deberá verificarse si esta se realizó de conformidad con las disposiciones vigentes*

---

<sup>1</sup> Criterio /00015-09, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos de México.

*en ese momento, o bien, si la destrucción se hizo de manera arbitraria*<sup>2</sup>. Sin embargo, debe constar en la declaratoria de inexistencia por parte del oficial de información respecto a ello.

De igual forma, este Instituto ya ha emitido resoluciones<sup>3</sup> donde ha tomado como base los criterios emitidos por la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), y en relación a la inexistencia de la información ha establecido que: “se deberá comprobar y motivar que la información solicitada no existe, y para ellos, se tiene que acreditar que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos materiales y en su caso, digitales consignando los requisitos que den certeza de que la búsqueda fue realizada de manera minuciosa, tales como: i) que se hizo llegar la solicitud de acceso a todas las áreas competentes que pudieran contar con la información requerida, con el propósito de que, en su caso la localizaran y manifestaran si se encontraba disponible; ii) que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información y que estas fueron las adecuadas para atender el caso concreto; iii) que el criterio de búsqueda utilizado fue el adecuado: amplio y extensivo (es decir, no restrictivo); iv) que de la búsqueda efectuada no se localizaron documentos o información que den cuenta de lo solicitado; y v) la precisión, en su caso de que se procedió a la destrucción de la información por cuestiones de la vida útil, en los términos de la ley de que se trate. Cuando posterior al análisis de la inexistencia de la información, se determine que la misma debería de existir en virtud de que deriva del ejercicio de facultades, competencias o atribuciones de la autoridad (ente obligado) ésta deberá generarse o reponerse en los caso que sea posible”.

No obstante a lo anterior, la inexistencia de la información decretada por los entes obligados, no deber ser utilizada como un límite al DAIP de los solicitantes de la información, pues deben probar que han realizado las diligencias necesarias para su obtención o reconstrucción y futura entrega de la información.

**III.** Ahora bien, en cuanto a la carga de la prueba para justificar cualquier negativa de acceso a la información, este Instituto ya ha establecido que esta debe recaer en el órgano al cual la información fue solicitada, pues con ello se alcanza un mayor grado de seguridad jurídica en el ejercicio del derecho de acceso a la información, pues al estar la misma en

<sup>2</sup> Resolución Definitiva IAIP 39-A-2013, del 28 de octubre de 2013.

<sup>3</sup> Resolución definitiva IAIP 143-A-2017, emitida el 11 de diciembre de 2017.



control del Estado, debe evitarse al máximo el actuar discrecional de este, al momento de establecer las restricciones.<sup>4</sup>

En este sentido y en relación al presente caso, se procederá a analizar la prueba aportada por la **Municipalidad de Ahuachapán**.

a. En cuanto a la prueba consistente en la declaratoria de inexistencia de ingresos por renta o alquiler provenientes de las instalaciones del Estadio Municipal Dr. Simeón Magaña de la Ciudad de Ahuachapán, suscrito por el Jefe de Cuentas Corrientes y Recuperaciones de Mora, Manuel Alfonso López Quiñones, este Instituto consideró pertinente basarse en el principio de legalidad,<sup>5</sup> el principio de verdad material <sup>6</sup> y el principio de buena fe<sup>7</sup> establecido en el Art. 3, numeral 8 de la Ley de Procedimientos administrativos (LPA).

En este sentido, este Instituto intuye que se realizaron todas las diligencias pertinentes de búsqueda para localizar esta información, derivando entonces en la declaratoria de inexistencia de dicha información por parte de la unidad correspondiente. En consecuencia, al no existir argumentos en contra del referido documento y en base al Art. 106 de la LPA; 330 y 416 del CPCM, el referido documento se tendrá como plena prueba y en base a la presunción de legalidad de los actos emitidos por dicha unidad, se dará como válida.

Por lo tanto, se tiene por acreditada la inexistencia de la información relacionada con los ingresos por renta del referido recinto deportivo, porque nunca se generó. De esta manera cuando la información no existe porque nunca se ha generado y no hay obligación legal de generarla, resulta oportuno señalar al oficial de información que se apegue a lo dispuesto en el Art. 73 de la LAIP y emita declaratoria de inexistencia de la información, a fin que el

---

<sup>4</sup> Resolución definitiva del IAIP 72-A-2016 del 06 de junio de 2016.

<sup>5</sup> Este principio consiste que la Administración Pública actuará con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico, de modo que solo puede hacer aquello que esté previsto expresamente en la Ley y en los términos en que ésta lo determine;

<sup>6</sup> Este principio consiste en que las actuaciones de la autoridad administrativa deberán ajustarse a la verdad material que resulte de los hechos, aun cuando no hayan sido alegados ni se deriven de pruebas propuestas por los interesados.

<sup>7</sup> Este principio consiste en que todos los participantes en el procedimiento deben ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una persona correcta, la cual se presume respecto de todos los intervinientes.

ciudadano conozca los motivos de inexistencia y así se satisfaga su derecho de acceso a la información pública.

b. Ahora bien, en cuanto a los gastos de mantenimiento del referido recinto deportivo, en nota suscrita por Jeamileth Menéndez de Contreras, Contadora de la Alcaldía Municipal de Ahuachapán, manifestó que no se llevan registros específicos de ninguna unidad de la municipalidad, que todos los gastos contablemente se registran por áreas de gestión, es decir, de manera general, por lo que no es posible separar información de los gastos de mantenimiento de manera detallada, incluso gastos fijos como agua y energía eléctrica que están incluidos en recibos colectivos.

Con base al principio de verdad material mencionado anteriormente; y en base a los hechos que gozan de notoriedad general, que son aquellos que entran naturalmente en el conocimiento, en la cultura o en la información normal de los individuos, con relación a un círculo social o a un lugar o momento determinado, en la oportunidad en que ocurre la decisión. El art. 314 ord. 2º del CPCM establece que se hallan exentos de prueba.

Efectivamente, este Instituto no pasa inadvertido el hecho que el día 29 de agosto de 2019, en una nota periodística publicada en la “Prensa Gráfica” en la cual informan que el referido recinto deportivo se encuentra en remodelación<sup>8</sup>; de igual manera, el día 11 de septiembre del presente año, salió publicada otra nota periodística digital en “La Prensa Gráfica” en la cual señalan que la Alcaldía Municipal de Ahuachapán ha invertido cerca de \$40,000.00 en la remodelación del estadio Simeón Magaña, para que el equipo de fútbol 11 Deportivo pueda realizar sus partidos de local en ese recinto deportivo.<sup>9</sup>

En ese sentido, la divulgación o publicidad de tales remodelaciones efectuadas es un hecho que goza de notoriedad general en la sociedad salvadoreña, por lo que resulta imperativo que la municipalidad tenga documentado en sus registros contables dichos gastos de mantenimiento del mencionado recinto deportivo.

<sup>8</sup> Puede verse en: <https://www.laprensagrafica.com/deportes/Estadio-Simeon-Magana-de-Ahuachapan-en-remodelacion-20190829-0347.html>

<sup>9</sup> Puede verse en: <https://www.elgrafico.com/futbol/El-estadio-Simeon-Magana-ampliara-su-aforo-a-5-mil-espectadores-20190911-0015.html>



Finalmente, este Instituto considera que existen elementos suficientes para comprobar que, en efecto, existen gastos de mantenimiento que se han realizado en dicho recinto deportivo; y aunque la municipalidad establece que dichos gastos están consolidados de manera general y no es posible separar la información de los gastos de mantenimiento de manera detallada, como gastos fijos como agua y energía eléctrica que están incluidos en recibos colectivos, en base al principio de máxima publicidad, se debe respetar y garantizar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración Pública, así como la de sus fundamentos y en facilitar el acceso irrestricto de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley.

Por lo tanto, con todo lo relacionado anteriormente y en aras de garantizarle el derecho de acceso a la información al ciudadano que establece el Art. 2 de la LAIP, este Instituto considera procedente modificar la resolución emitida por el oficial de información de la **Municipalidad de Ahuachapán** y ordenarle al referido ente que haga una separación de los gastos de mantenimiento que tengan que ver con el estadio Simeón Magaña, detallando cuanto se ha gastado en dicho mantenimiento y que reflejen las remodelaciones que ha tenido el recinto deportivo, como el mencionado anteriormente, durante los periodos solicitados por **Rubio Martínez**.

En este sentido, de conformidad con las razones antes expuestas, y con base en las disposiciones legales citadas y en los Arts. 2, 6, 18 y 85 y 86 de la Cn., y 94, 96 letra d y 102 de la LAIP, este Instituto **resuelve**:

a) **Modificar** la resolución emitida por la Oficial de Información de la **Municipalidad de Ahuachapán**, el día 16 de julio de 2019.

b) **Absolver** a la **Municipalidad de Ahuachapán** con respecto a la entrega de la información referente a los ingresos por renta del estadio Dr. Simeón Magaña, por las argumentaciones y razones dadas en esta resolución, requiriéndole al Oficial de Información que se apegue a lo dispuesto en el Art. 73 de la LAIP y emita declaratoria de inexistencia de la información a fin que el ciudadano conozca los motivos de inexistencia y así se satisfaga su derecho de acceso a la información pública.



c) **Ordenar** al oficial de información de la **Municipalidad de Ahuachapán**, que en el plazo de 8 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, le entregue a **Enrique René Rubio Martínez** el detalle de gastos de mantenimiento que tengan que ver con el estadio Dr. Simeón Magaña, detallando todos los gastos que tengan que ver con el mantenimiento y que se reflejen el gasto de las remodelaciones que ha sufrido el recinto deportivo, como el mencionado anteriormente en esta resolución, durante los periodos solicitados por el requirente.

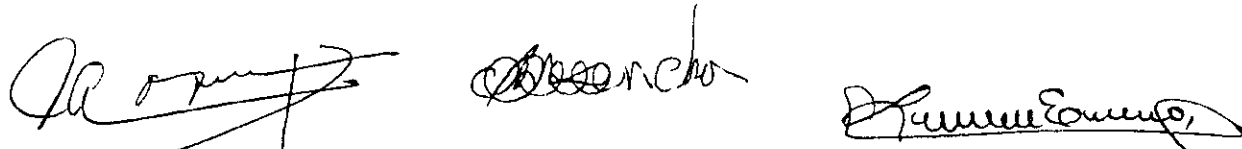
d) **Ordenar a la Municipalidad de Ahuachapán** que, por medio de su titular, dentro de las veinticuatro horas posteriores al vencimiento del plazo anterior, remita a este Instituto un informe de cumplimiento en el que conste que se le dio trámite a la solicitud de información de la apelante, bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. Este informe puede ser remitido por vía electrónica a la dirección: **oficialreceptor@iaip.gob.sv**

e) **Hacer saber a las partes** que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, dejando expedito el derecho de acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si así se considerase necesario.

f) **Remitir** el presente expediente a la Unidad de Cumplimiento de este Instituto para verificar la ejecución de esta resolución.


g) **Publíquese** esta resolución oportunamente.

*Notifíquese.-*

  
**PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN**

JJ/CC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los diecinueve días del mes de diciembre de dos mil diecinueve.

  
José Augusto Hernández Funes  
NOTIFICADOR  
IAIP

